

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por WILSON ARMANDO VELÁSQUEZ JARAMILLO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-001-2017-00949-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Leidy Vanessa Garcés Mendoza, con tarjeta profesional No. 254.414 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se condene a Colpensiones al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente Luis Carlos Machado Pérez a partir de la fecha de su muerte, mesadas adicionales, los intereses moratorios y/o la indexación y las costas del proceso

Como fundamento a sus pretensiones, narró que nació el 5 de noviembre de 1967; convivió con el señor Luis Carlos Machado Pérez, compartiendo techo, lecho y mesa desde el 7 de agosto de 2003 hasta el 11 de marzo de 2015, fecha de su deceso; al inició de la convivencia y por motivos de trabajo, vivía en Copacabana trabajando en un supermercado mientras que el causante pernoctaba en Medellín, pues allí trabajaba al servicio de su prima Alicia Botero, y en las noches se encargaba de cuidar a una de sus tías llamada Sara, por lo que se comunicaba frecuentemente con su pareja por vía telefónica para estar al tanto de sus vivencias personales y, además, compartían en Copacabana los días de descanso, vacaciones y fines de semana; a finales del año 2004 arrendó el apartamento que tenía en Copacabana para irse a vivir junto a su compañero en la propiedad que éste tenía en la vereda Pontezuela de Rionegro, donde establecieron su domicilio hasta el mes de noviembre del año 2013, fecha para la cual y por motivos de un cáncer avanzado padecido por el señor Machado Pérez (tumor maligno del estómago), decidieron vender dicha propiedad para trasladarse a la casa ubicada en la Urbanización América Real, ubicada en la calle 48 E # 96 A - 61, en el Barrio Floresta La Pradera (Medellín); la señora Alicia Botero le dio empleo en el cargo de “rondero” en la Unidad Residencial Torres de Lorena ubicada en el Poblado de Medellín, con horarios de trabajo variable, razón ésta que sumada al estado avanzado del cáncer de su compañero, motivó que resolvieran a principio de enero de 2015, que lo mejor para Luis Carlos era trasladarse a vivir a la casa de su prima Alicia Botero para efectos de que ella lo cuidara mientras que él laboraba, por lo que permanecía con Luis Carlos cuando su horario laboral se lo permitía, se comunicaban vía telefónica cuando no podían verse y pasaba con él sus días de descanso; durante las crisis en que su compañero estuvo hospitalizado, lo cuidó y amaneció con él; mediante escritura pública número 595 del 3 de abril de 2014 otorgada en la Notaria 28 del Círculo de Medellín, el señor Luis Carlos Machado Pérez lo designó como heredero universal de todos los bienes que le correspondan o le llegaren a corresponder; su compañero falleció el 11 de marzo de 2015 sin haber contraído matrimonio y sin haber procreado descendencia y, en

consecuencia, elevó ante Colpensiones dos peticiones fechadas el 27 de julio de 2015 y el 15 de octubre del mismo año, deprecando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; del certificado emitido por la Funeraria La Esperanza S.A. el 18 de marzo de 2015, se evidencia que al señor Luis Carlos Machado Pérez le fueron prestados los servicios fúnebres correspondientes, en calidad de beneficiario del titular principal plan pre-exequial adquirido a través del contrato No. 45994 por él, el cual fue suscrito desde el año 2010; mediante la Resolución GNR 254773 del 21 de agosto de 2015, Colpensiones reconoció y ordenó el pago de un auxilio funerario por valor de \$3.221.750, en favor de él y con ocasión del fallecimiento del afiliado Luis Carlos Machado Pérez; a través de la Resolución GNR 84774 del 18 de marzo de 2016, y dando cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad, Colpensiones dio respuesta a las peticiones que había elevado, pero negando la prestación con fundamento en que, a pesar de haber acreditado más de 1163 semanas al momento del fallecimiento, como resultado de la investigación se determinó que no existió convivencia en calidad de compañeros permanentes durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante de manera constante e ininterrumpida; en contra de dicha resolución se interpusieron los recursos de ley, siendo resuelto el de reposición mediante resolución GNR 261566 del 5 de septiembre de 2016, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada

COLPENSIONES dio respuesta al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos adujo como ciertos los de la muerte del afiliado, la edad del demandante, el contenido de las resoluciones emitidas por la entidad frente al reconocimiento y pago del auxilio funerario y de la negación frente a la pensión de sobrevivientes, al no constarle el de la convivencia por tratarse de una situación fáctica objeto de prueba. Como medio de oposición propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar al demandante la prestación solicitada; inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el retroactivo, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación,

prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Surtido el trámite de rigor, el 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que DECLARÓ que al señor WILSON ARMANDO VELÁSQUEZ JARAMILLO le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor LUIS CARLOS MACHADO PÉREZ, desde el 11 de marzo de 2015 y, en consecuencia, CONDENÓ a COLPENSIONES a pagarle al demandante la suma de \$66.844.656 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 11 de marzo de 2015 y hasta el 31 de octubre de 2021, incluida la mesada adicional de noviembre pagadera en diciembre, del cual se autoriza a la demandada a realizar los descuentos para el Sistema de Salud; CONDENÓ igualmente a la entidad a pagarle al demandante los intereses moratorios a partir del 29 de septiembre de 2015, a la tasa máxima vigente al momento del pago, así como al pago de las costas procesales, fijándole como agencias en derecho la suma de \$5.587.652.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación la apoderada de la entidad accionada, a quien le fue concedido. Como argumentos expone que de manera oficiosa la entidad realizó la investigación administrativa sobre el caso, y que si bien esta no fue aportada al plenario, no se pueden desconocer las conclusiones a las que se llegó con la misma. Refiere frente a las declaraciones extra juicio allegados a un proceso judicial que se debe surtir el trámite previsto para la ratificación conforme al artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Código General del Proceso, por lo que cuando no se surte dicho trámite, dichas declaraciones no pueden tenerse ni siquiera como indicio, en la medida que no se garantiza el principio de contradicción y defensa de la parte contraria, por lo que solo podría tenerse en cuenta como prueba sumaria en los eventos en que haya sido de pleno conocimiento de la parte contraria del proceso, así como la investigación administrativa que adelantó la entidad en contra de la parte demandante. Frente al material probatorio allegado al

proceso, indica que el testigo Juan Pablo Rodríguez es de oídas, por cuanto sus dichos están enmarcados por situaciones que le contaron más no porque tengan conocimiento personal de la ocurrencia de los hechos, incluso incurre en inconsistencias como lo fue el que en un principio señaló que visitó la pareja 2 veces y, después, señala que lo hizo en 6 oportunidades en las 3 casas de habitación en la que indica hicieron vida de pareja el demandante con el causante e, incluso, desconoce asuntos como en que EPS estaba afiliado el señor Luis Carlos. Agrega que no aparece registro que el señor Wilson aparezca como beneficiario de la EPS del señor Luis Carlos, así como que se hace referencia a una relación filial entre unas primas y una empleadora que aparece en la historia laboral del causante, esto es la señora Alicia Botero, que en el proceso dicen que es la prima pero no existe evidencia en el plenario de ese grado de consanguinidad, quedando entonces que es una empleadora independiente que registra unas cotizaciones para que el señor Luis Carlos pudiera alcanzar la densidad de semanas necesarias para que los beneficiarios accedan a una pensión de sobrevivientes. Señala que la prueba documental da cuenta que el señor Luis Carlos siempre aparece con estado civil soltero sin unión marital, sin que haya quedado demostrada la convivencia entre el aquí demandante y el causante en lo concerniente a compartir techo, lecho y mesa, por lo que tampoco habría lugar a la imposición de los intereses moratorios.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Luis Carlos Machado Pérez falleció por causas de origen común el 11 de marzo de 2015 (fl. 20 Anexos Demanda), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, tal como lo reconoce la entidad accionada en la Resolución

GNR 84774, del 18 de marzo de 2016. Tampoco se discute que Colpensiones, mediante Resolución GNR 254773 del 21 de agosto de 2015, le reconoció al señor Wilson Armando Velásquez Jaramillo el auxilio funerario con ocasión del fallecimiento del señor Machado Pérez y le negó la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución GNR 84774, al no haber acreditado la convivencia con el causante.

De cara a lo anterior, y atendiendo los argumentos de la alzada, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer si el señor Wilson Armando Velásquez Jaramillo acreditó el requisito de la convivencia exigida por la ley que lo promueva como beneficiario de la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañero permanente por el fallecimiento del afiliado Luis Carlos Machado Pérez acaecido el 11 de marzo de 2015. Definida esa situación jurídica, si es del caso, se analizará la procedencia de imponer los intereses moratorios a cargo de Colpensiones y las demás condenas a que haya lugar por el grado de la consulta.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada por lo que al haber ocurrido el deceso el 11 de marzo de 2015, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

Así, para quien pretenda ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independiente que quien fallezca es un afiliado o un pensionado, tal como lo tiene asentado la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia con radicado SU149-21.

Ahora bien, para analizar el requerimiento de convivencia, debe primeramente señalarse que en aplicación del artículo 61 del CPTSS, el juez se encuentra en la libertad de integrar su convencimiento a través de los medios probatorios que estime convenientes, sobre todo para el presente caso, donde se encuentra de por medio una relación de pareja del mismo sexo, y esto con el fin de proteger los derechos de personas que históricamente han tenido un trato discriminatorio, para lo cual se habrá de tener en cuenta el criterio amplio de familia que señaló la Corte Constitucional en sentencia C-577 de 2011, en el que incluyen igualmente este tipo de vínculos cuando conforman la unión con una manifestación libre y voluntaria con vocación de estabilidad y permanencia. En el caso particular, se hizo un análisis detallado del testimonio traído al interior del plenario y de las pruebas documentales allegadas, dejando claro que no se discute que el causante dejó acreditados los requisitos para que quien acreditara la calidad de beneficiario accediera a la pensión de sobrevivientes.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido una convivencia ininterrumpida y permanente de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva-durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* (Ver SL3813-2020 y SL5540-21 que traen a colación la SL1399-2018).

Para ese fin, el promotor de esta acción judicial allegó como medio de convicción la testimonial del señor Juan Pablo Rodríguez, quien señaló que conocía al demandante desde hacía aproximadamente 22 años en razón a su apostolado como sacerdote, donde inicialmente conoció a la madre de este y luego la relación se extendió a los demás miembros de la familia; conoció al causante unos 11 años antes de su muerte refiriendo que la pareja inició la convivencia en un apartamento en el Municipio de Copacabana de propiedad del señor Wilson Armando, luego se fueron a vivir a Llanogrande en Rionegro en una propiedad del señor Luis Carlos y, en los últimos años, en el barrio la Floresta de Medellín, dada la condición de salud del señor Luis Carlos, por cuanto le fue diagnosticado cáncer. Señala que visitó en Copacabana a la pareja en 3 ocasiones, luego estuvo 2 veces en Rionegro e igual cantidad en la Floresta, describiendo en detalle este último de los lugares donde vivieron. Dice no saber la EPS en la que se encontraba afiliado el causante, ni el sitio en el que fue enterrado, por cuanto para la fecha de su fallecimiento estaba por fuera de la ciudad de Medellín. Hace referencia al último trabajo del señor Wilson indicando que éste era rondero en un edificio que administraba la familia de Luis Carlos, y describe de manera muy general el acompañamiento al causante en los últimos tiempos anteriores a su muerte, pues indica que durante un tiempo estaba con la familia y otro con el señor Wilson cuando éste podía estar con él.

En cuanto a la prueba documental obrante en el plenario, se evidencia la existencia de unas declaraciones extra juicio que fueron rendidas en dos anualidades diferentes por parte de la señora Natalia Cristina Álvarez Correa y Cesar Augusto Ardila Marín, pues la primera de ellas está fechada el 29 de abril de 2015 y la otra el 11 de abril de 2016, respecto de las cuales no se solicitó la ratificación por parte de la demandada, por lo que habrá lugar a analizar su contenido conforme a lo que de ellas se desprendan, y en la que tales personas indicaron que conocían a los señores Wilson Armando Velásquez Jaramillo y Luis Carlos Machado Pérez desde hacía aproximadamente diez años y hasta la fecha de la muerte de este último,

que tenían formada una familia bajo el vínculo de la unión marital desde el 7 de agosto de 2003 hasta la muerte del señor Machado Pérez, y que no conocían de la existencia de hijos, declaraciones que son rendidas de manera muy general y que no permiten determinar con detalle la manera en que se desarrolló la relación en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, y los pormenores que rodearon la misma, de donde es poco lo que se puede desprender de los dichos allí vertidos, a más de que se evidencia que estas declaraciones son formatos pre establecidos en las notarías, pues comparando una y otra resultan iguales, siendo que de por medio existe un año de diferencia.

Así mismo, aparece una copia de la historia clínica del señor Luis Carlos Machado Pérez fechada el 16 de diciembre de 2013 (fl. 12), en la que aparece como Dx. Principal el de “*TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA*”, sin que dentro de la descripción de los datos del acompañante aparezca relacionada persona alguna.

Igualmente aparece copia de una escritura de venta a favor del señor Luis Carlos Machado Pérez, con fecha del 1° de noviembre de 2013 (fl. 13), en la que este adquiere el inmueble ubicado en la calle 48 E Nro. 96 A 61 de Medellín, y donde frente a la indagación sobre afectación a vivienda familiar se anotó lo siguiente “*...el suscrito Notario indaga al comprador si es casado, si tiene sociedad conyugal vigente, matrimonio o unión marital de hecho y si posee otro bien distinto al que adquiere, afectado a vivienda familiar, a lo que respondió bajo la gravedad del juramento; que su estado civil es soltero sin unión marital, y por disposición expresa de la Ley, el inmueble que adquiere no queda afectado a vivienda familiar*”.

Seguidamente aparece otra escritura pública en la que se especifica como “*CLASE DE ACTO: TESTAMENTO ABIERTO*”, con fecha del 3 de abril de 2014, y en el que se indica “*...Me llamo como queda expresado LUIS CARLOS MACHADO PÉREZ, nací en el Municipio de Medellín (Antioquia), el día treinta (30) de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve (1959),*

*por lo tanto soy Colombiano de Nacimiento, tengo en la actualidad 55 años cumplidos, me identifico con la cédula de ciudadanía número 15.425.048, soy de estado civil soltero, sin unión marital de hecho, mi domicilio habitual es la ciudad de Medellín (Ant), en la calle 49 A #65 A 2...”, y más adelante se indica en el mismo documento “...Soy hijo legítimo de **FRANCISCO ANTONIO MACHADO ROLDAN y MARTA PRAXEDIS PÉREZ PÉREZ** (ambos fallecidos); hasta el momento no he contraído matrimonio, no tengo unión marital de hecho, no he procreado hijos extramatrimoniales, y no tengo hijos adoptivos **B. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS: PRIMERA:** Al no tener descendencia, ni ascendencia denominados por la ley Colombiana como asignatarios forzosos, cuento con la libre disposición de mis bienes, y en consecuencia dispongo que una vez ocurrida mi muerte, mis bienes sean distribuidos y adjudicados de la siguiente forma: Designo como heredero universal de todos los bienes que me corresponden o me puedan llegar a corresponder al señor **WILSON ARMANDO VELASQUEZ JARAMILLO**, mayor de edad...”.*

Por último, aparece un contrato de servicios pre-exequiales, suscrito por el señor Wilson Armando Velásquez Jaramillo, en calidad de “soltero”, y en el que se registran como personas inscritas a varios familiares de éste y el señor Luis Carlos Machado Pérez con “PARENTESCO, amigo”, siendo mediante este contrato que se prestaron los servicios fúnebres del señor Machado Pérez, y por el cual le fue cancelado el auxilio funerario al señor Velásquez Jaramillo por parte de la entidad accionada.

Bajo esta óptica, y sin dejar de lado que nos encontramos en el análisis del derecho a una pensión de sobrevivientes derivada de una relación de pareja del mismo sexo, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que, en realidad, no quedó debidamente demostrada la convivencia exigida por la norma para declarar como beneficiario de la misma al señor Wilson Armando Velásquez Jaramillo.

Y se dice lo anterior por cuanto si bien el testimonio del señor Juan Pablo Rodríguez da cuenta de una posible relación de pareja entre el señor Wilson Armando Velásquez Jaramillo y el señor Luis Carlos Machado Pérez, las pruebas documentales certifican de manera clara y precisa una situación completamente contraria; pruebas estas que incluso en su mayoría provienen de quienes supuestamente conforman la pareja, y que si bien en otrora resultaba complejo para las personas del mismo sexo e, incluso, algún temor en declarar públicamente la relación, tal situación no fue demostrada al interior del plenario, por cuanto ninguna alusión se hizo al respecto.

Nótese como en esas probanzas al unísono se refieren como estado civil de quienes aparecen como pareja el de solteros, y más aún, sin unión marital de hecho, afirmaciones que fueron registradas en documentos emitidos en los años 2013 y 2014, esto es, dos años anteriores a la muerte del señor Machado Pérez, lo que genera un alto grado de incertidumbre frente a que ellos tenían una verdadera vocación de formar una familia, con las consecuentes obligaciones que ello generaba, como lo era la ayuda mutua, el acompañamiento espiritual y económico, las cuales brillan por su ausencia al interior del plenario, por lo que la convivencia exigida por la norma para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes no quedó demostrada.

Y es que si bien la demostración de la convivencia se puede hacer con cualquier medio probatorio que le lleve al sentenciador la convicción de que los hechos narrados ocurrieron de tal forma, en el plenario aparece una falencia demostrativa para alcanzar tal fin, pues al analizar en su conjunto el material probatorio allegado al plenario, no existe claridad en cuanto a que la relación del demandante y fallecido hubiese tenido como propósito el de conformar una familia, dado que no existe ningún registro que dé cuenta que los mismos conformaban una unión marital de hecho, quedando solo como soporte de la argumentación un testimonio que a todas luces resulta insuficiente frente a los registros por quienes conformaban la

relación en sus diferentes escritos, y si bien aparecen unas declaraciones extra juicio señalando de manera general el conocimiento que tenían del actor y del señor Luis Carlos Machado Pérez, estas, confrontadas con los propios dichos del causante, no generan una debida certeza de lo allí expresado.

En este entendido, no se hace necesario analizar los demás reparos de la parte recurrente, pues con lo hasta aquí descrito, resulta suficiente para revocar la sentencia y, en su lugar, absolver a la entidad accionada de todas las pretensiones formuladas en su contra, dando cuenta de ello en la parte resolutive de esta providencia. Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte actora. En esta se fijan como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia apelada, de fecha y procedencia indicadas y, en su lugar, **ABSUELVE** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **WILSON ARMANDO VELÁSQUEZ JARAMILLO**.

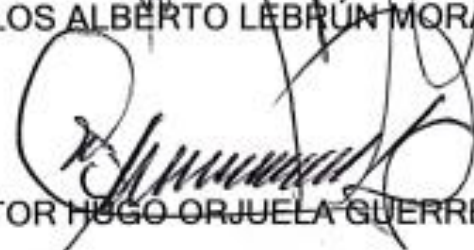
Costas de las instancias a cargo de la parte actora. Como agencias en derecho en esta se fija la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).


Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500120170094901
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: WILSON ARMANDO VELASQUEZ JARAMILLO
Demandado: COLPENSIONES
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 6/02/2023
Decisión: REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 7/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario